



## Consejo Económico y Social

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1987/21  
2 de febrero de 1987

Original: ESPAÑOL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
43° período de sesiones  
Tema 12 del programa provisional

### CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y EN PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Informe definitivo a la Comisión de Derechos Humanos sobre la  
situación de los derechos humanos en El Salvador que presenta  
el Sr. José Antonio Pastor Ridruejo, en cumplimiento del  
mandato conferido por la resolución 1986/39  
de dicha Comisión

#### INDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION .....	1 - 2	2
I. SITUACION POLITICA GENERAL .....	3 - 7	2
II. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES .....	8 - 25	3
III. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS .....	26 - 75	7
IV. LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS .....	76 - 82	18
V. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS .....	83 - 108	20
VI. LA PREOCUPACION DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS.....	109 - 121	26
VII. CONCLUSIONES .....	122 - 129	28
VIII. RECOMENDACIONES .....	130 - 133	30

## INTRODUCCION

1. Se redacta el presente informe en cumplimiento de la resolución 1986/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
2. En carta de 17 de octubre de 1986 del Director del Centro de Derechos Humanos al Representante Especial se indicaba que todos los informes habían de limitarse a 24 páginas impresas. A fin de cumplir con esta indicación, el Representante Especial va a prescindir de buena parte de lo que escribió en el informe sometido en el pasado otoño a la Asamblea General, y que fue editado en dos partes separadas: informe propiamente dicho y "material suplementario". En todo caso la lectura del presente informe a la Comisión de Derechos Humanos ha de hacerse teniendo en cuenta aquellos documentos, y muy especialmente el llamado "material suplementario".

### I. SITUACION POLITICA GENERAL

3. El Representante Especial quiere señalar que continúa en El Salvador la vigencia del estado de sitio, prorrogado mensualmente, de acuerdo a la Constitución, por la Asamblea Legislativa. Las libertades y garantías constitucionales suspendidas son las siguientes: libertad de tránsito, libertad de expresión y libertad de correspondencia.
4. En lo que concierne al diálogo entre el Gobierno constitucional de El Salvador y el FMLN-FDR, y según noticias de conocimiento público 1/, a principios del mes de marzo de 1986 el Presidente Duarte escribió una carta al Presidente Ortega de Nicaragua proponiendo la apertura simultánea de negociaciones con los movimientos guerrilleros de los respectivos países. De acuerdo a la misma fuente, el Sr. Ungo, Presidente del FDR, aceptó el 11 de marzo la reanudación del diálogo nacional para la paz, aunque no deseaba condicionarlo a la apertura de un diálogo simultáneo entre el Gobierno sandinista de Nicaragua y la oposición contra.
5. Según noticias posteriores de conocimiento público 2/, a primeros de junio de 1986, el Presidente Duarte invitó a los dirigentes guerrilleros del FMLN, en una alocución televisada, a participar en una ronda de conversaciones para poner fin a la guerra, las conversaciones se harían "sin armas, en territorio nacional, a finales de julio o primeros de agosto". El día 4 de junio la guerrilla aceptó la propuesta. Noticias posteriores 3/ confirmaron la intención negociadora del Presidente Duarte, a pesar del duro combate que a mediados de junio sostuvieron el ejército y las guerrillas del FMLN en la ciudad de San Miguel en la región oriental del país, con pérdidas de vidas humanas para una y otra parte.
6. De hecho, el día 20 de agosto siguiente, en un lugar secreto de Ciudad de México, representantes del Gobierno y del FMLN-FDR iniciaron unos encuentros preparatorios de carácter confidencial y con la presencia de Monseñor Rivera y Damas, Arzobispo de El Salvador, con la finalidad de determinar fecha, lugar y agenda de las conversaciones de paz 4/. En esos encuentros se llegó al acuerdo de celebrar la tercera ronda de conversaciones en la localidad de Sesori, 150 km al este de San Salvador, el día 19 de septiembre siguiente.

7. El Representante Especial ha sabido por la prensa internacional 5/ que el día 19 de septiembre el Presidente Duarte se desplazó hasta la localidad de Sese, aun a sabiendas de que los representantes de los grupos armados no acudirían a la cita, al no haber satisfecho la otra parte su reclamación de que la zona fuera desmilitarizada. En Sese y en esa ocasión, el Presidente Duarte habría declarado que no aceptaría una tercera reunión preparatoria con los guerrilleros, pero que estaba dispuesto a entablar desde ese mismo momento la tercera ronda de diálogo con la guerrilla. La misma fuente informa que en la madrugada de ese día, el FMLN atacó posiciones del ejército en Ciudad Barrios, a escasos kilómetros de Sese, poco antes de la llegada del Presidente Duarte y su comitiva.

## II. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

8. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 6/, la economía de El Salvador experimentó un leve crecimiento (1,4%) en 1985, como en el año anterior, con lo que salió de la etapa recesiva en que se encontraba desde 1979. Sin embargo, en el informe de la Comisión se observa que el sexto año consecutivo de guerra ha afectado la producción provocando un aumento de los costos sociales y tensiones en el clima social y político. Según se informa, en 1985 se duplicó la inflación y aumentó el déficit en cuenta corriente, sin embargo, se redujo significativamente la proporción de las finanzas públicas en el déficit fiscal.

9. Según un informe entregado personalmente al Representante Especial por el Presidente José Napoleón Duarte el 26 de septiembre de 1986 7/, el Gobierno está ejecutando un plan destinado a estabilizar y reactivar la economía ("Programa de estabilización y reactivación económica"). El plan combina medidas fiscales, monetarias y cambiarias. El Representante Especial ha escrito que a finales de 1986 se han adoptado en El Salvador una serie de medidas fiscales que suponen, entre otras cosas, el establecimiento de un llamado impuesto de defensa de la Soberanía Nacional.

10. En sus informes anteriores, el Representante Especial se refirió detenidamente al programa de reforma agraria, emprendido por la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1980. Cabe recordar que, según el artículo 105 de la Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1983 y en vigor desde el siguiente 20 de diciembre, cualquier persona natural o jurídica en El Salvador puede ser propietaria de una explotación de hasta 245 hectáreas, lo que significa que la primera fase del programa de reforma agraria no prevé explotaciones de mayor tamaño.

11. Según la información recibida por el Representante Especial, las tres fases del programa de reforma agraria "... afectan actualmente al 26% de los campesinos pobres y al 22% de las tierras agrícolas. Hasta el momento, en la primera fase de la reforma agraria se han transformado 469 explotaciones de gran extensión en 517 cooperativas que agrupan más de 31.000 miembros. En la tercera fase, se han otorgado más de 240.000 acres a 65.782 beneficiarios, que eran arrendatarios o aparceros. Con arreglo a las disposiciones relativas a la segunda fase de la reforma, los propietarios tienen plazo para vender la superficie que exceda de 605 acres hasta diciembre de 1986, fecha a partir de la cual podrán ser objeto de expropiación sin indemnización previa" 8/. Un problema importante que afecta la viabilidad financiera de las cooperativas de

la primera fase es la deuda de la reforma agraria. Según se informa, un 95% de las cooperativas de la primera fase no pueden cumplir las obligaciones del servicio de la deuda respecto de una suma estimada en 800 millones de dólares que abarca el pago de la tierra, créditos de emergencia y préstamos para inversiones y producción.

12. Según el informe entregado al Representante Especial por el Presidente de la República 9/, entre junio de 1985 y julio de 1986 el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) adoptó medidas para acelerar el pago de la tierra comprendida en la reforma y entregarla a los beneficiarios. Según se informa, el Presidente Duarte dio instrucciones al ISTA para que resolviera los casos pendientes de títulos e indemnizaciones antes de fin de 1986. "Según el informe del Gobierno de El Salvador, el Gobierno, mediante la coordinación entre el ISTA y otros organismos estatales, ha promovido y canalizado la implementación de políticas que han puesto a disposición de las cooperativas el crédito oportuno, la comercialización de insumos y productos agropecuarios, la asistencia técnica adecuada, un tratamiento favorable de la deuda agraria (6% de interés, 50 años de plazo, 5 años de gracia y/o interés en la cartera de anticipos) y especialmente programas de desarrollo social mediante los cuales se ha buscado mejorar la calidad de la vida de las familias beneficiarias del proceso humanizando su hábitat, salud, etc." 10/.

13. En cuanto a la segunda fase, relativa a las extensiones de 605 acres a 1.250 acres, se ha indicado al Representante Especial que los propietarios tienen plazo hasta diciembre de 1986 para vender la superficie que exceda de 605 acres, momento a partir del cual las tierras que superen ese límite podrán ser expropiadas sin indemnización previa. Se calcula que quedarán disponibles unos 41.000 acres como consecuencia de las ventas privadas de tierras concertadas en la segunda fase. En cuanto a la tercera fase, conocida como "la tierra para el que la trabaja" (máximo 17 acres), "los cambios recientemente aprobados en la Ley de Catastro de El Salvador deberían acelerar el proceso de otorgamiento de títulos por la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA). Los beneficiarios directos de la tercera fase ascendían en febrero de 1986 a 63.669, o 382.008 si se incluyen los familiares. La superficie distribuida era de 240.054 acres, se habían otorgado 65.900 títulos provisionales, así como títulos definitivos a un 17,56% de los beneficiarios y se había indemnizado a 1.622 propietarios" 11/.

14. La prensa internacional 12/ ha dado cuenta de la intranquilidad laboral reinante en el país. Así, el 8 de febrero de 1986 se formó la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños por una amplia gama de sindicatos que se oponían a las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno, por primera vez, se indica, sindicatos centristas se unieron con otros izquierdistas e incluso antiguos partidarios del Presidente Duarte se juntaron a la coalición, el día 21 de febrero, el nuevo sindicato realizó la mayor marcha de protesta en seis años. Otra manifestación es la que tuvo lugar el 1° de mayo de 1986 13/ cuando un número de trabajadores comprendidos entre 15.000 y 20.000 efectuaron una marcha por San Salvador, en la que miembros de cooperativas agrícolas, obreros de la construcción, maestros, algunos funcionarios y estudiantes universitarios protestaron contra las medidas de austeridad declaradas por el Gobierno.

15. El Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador informó al Representante Especial que en el sector privado se produjeron 54 huelgas durante el período comprendido entre junio de 1985 y septiembre de 1986, una de esas huelgas fue la iniciada el 26 de mayo de 1986 de forma violenta en la empresa "Industrias Unidas S.A.", que fue declarada ilegal por la autoridad judicial, y en la que algunos trabajadores tomaron las instalaciones, impidiendo el acceso a ellas de sus compañeros, infringiéndose así el artículo 13 del Código de Trabajo, por lo que a petición de la empresa intervino la Guardia Nacional, que procedió al desalojo pacífico de los huelguistas.

16. El Ministro de Trabajo comunicó también al Representante Especial que durante el período mencionado en el párrafo anterior tuvieron lugar asimismo huelgas en el sector público, en contravención a lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución, que prohíbe esa clase de huelgas. Los organismos estatales que se vieron afectados por esas huelgas fueron los siguientes: Instituto Salvadoreño de Seguro Social, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Correos, Instituto Salvadoreño de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Administración de Acueductos y Alcantarillados.

17. De hecho, la intranquilidad laboral reinante en El Salvador ha motivado la captura de sindicalistas. Algunos de ellos, puestos en libertad posteriormente, fueron entrevistados en San Salvador por el Representante Especial y, como se dirá en el capítulo correspondiente, manifestaron haber sido objeto de duras presiones psicológicas durante el interrogatorio extrajudicial. En la prensa Salvadoreña, ha podido leer el Representante Especial numerosas comunicaciones de sindicatos y otras asociaciones denunciando la violación de derechos laborales por las autoridades, además de asesinatos y capturas injustificadas de trabajadores y líderes sindicales.

18. En el presente capítulo, el Representante Especial se propone reproducir algunos de los muchos informes sobre el sabotaje sistemático de la infraestructura económica del país que lleva a cabo el FMLN. Las autoridades salvadoreñas volvieron a proporcionar al Representante Especial información exhaustiva sobre esos actos, incluidos cinco documentos que suman aproximadamente 1.200 páginas y fueron entregados al Representante Especial en El Salvador por el Ministerio de Defensa y Seguridad Pública. Como esta documentación es demasiado extensa y detallada para reproducirla en su integridad, el Representante la resumirá y agregará también parte de la información proporcionada por la prensa internacional y otras fuentes.

19. En la documentación suministrada al Representante Especial por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador 14/ se informa que los daños ocasionados por las organizaciones del FMLN-FDR durante el período comprendido entre septiembre de 1985 y julio de 1986 se pueden resumir así: 50 atentados al transporte público y privado: al sector privado: ocho atentados en contra de automóviles, 20 en contra de buses y dos en contra de vehículos pesados, por ametrallamiento (16), asaltos (2), incendios (6) y dinamiteros (6); al sector público: dos atentados en contra de automóviles, 16 atentados en contra de trenes y dos en contra de vehículos pesados por incendiarios (17) y dinamiteros (3). También informa de cinco paros de transporte. A la propiedad privada: 33 atentados en contra de la propiedad privada, incluyendo

cooperativas agropecuarias, fincas, haciendas y una avioneta de riego, igual que atentados en contra de cultivos y destrucción de granos básicos; 21 atentados en contra del sector económico y/o comercial incluyendo tres asaltos de tiendas, nueve atentados en contra de residencias particulares (cuatro asaltos, tres ametrallamientos y dos dinamiteros) y otros, tres atentados en contra de instituciones bancarias, tres atentados en contra de instalaciones de almacenamiento, 15 ataques a poblaciones, incluyendo cuatro tomas de poblaciones y siete saqueos a poblaciones. Otros incidentes incluyen atentados en contra de instituciones y/o oficinas gubernamentales: un asalto a una estación de bomberos, cinco ataques a las oficinas de ANTEL, dos incendios a oficinas de juzgados, cuatro ataques a alcaldías municipales, un incendio del Edificio de Estadística y Censo, y tres ataques en contra de escuelas.

20. Según la información presentada al Representante Especial por las autoridades durante su visita al país 15/, en el período comprendido entre el 1° de septiembre de 1985 y el 31 de julio de 1986, la compañía estatal de electricidad CEL fue objeto de 1.035 ataques de guerrilleros y dos ataques armados que destruyeron 66 torres metálicas (en la mayoría de los casos un poste o estructura provisional fue dinamitado más de 10 veces) 541 postes, 45 transformadores de distribución y los transformadores de las subestaciones de La Herradura en el Departamento de La Paz y de Ateos en el Departamento de La Libertad.

21. El 2 de febrero de 1986 dos trabajadores en San Rafael Cedros en Sensuntepeque resultaron gravemente heridos al explotar una mina del FMLN cerca de un poste de transmisión que habían volado la noche anterior y que los trabajadores habían ido a reparar. Los daños totales a la CEL incluida la destrucción de torres, postes, transformadores, infraestructura y equipo de las subestaciones ascienden a 96.105.856,79 colones, o sea 19.221.171,36 dólares. Según la misma fuente, las pérdidas totales sufridas por la CEL desde el 19 de agosto de 1980 hasta el 31 de julio de 1986 ascienden a 227.919.834,24 colones o sea 45.583.966,85 dólares. En el mismo período, los costos totales, directos e indirectos de los ataques de la guerrilla a la propiedad de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), incluidos los daños sufridos por líneas telefónicas, plantas, cables, vehículos, teléfonos públicos, etc., y los costos del personal adicional de seguridad ascienden a 52.352.042 colones, aproximadamente 10.460.408 dólares.

22. Según la información proporcionada por el Ministerio de Defensa y Seguridad Pública 16/, en el período comprendido entre el 1° de septiembre de 1985 y el 31 de agosto de 1986, las violaciones cometidas por miembros del FMLN-FDR pueden resumirse así: un total de 1.793 violaciones, divididas en las siguientes categorías: muertos por bala: 158, muertos por trampa explosivos: 28, heridos por bala: 54, heridos por trampa explosivos: 173, secuestros: 251, golpes: 12, violaciones: 6, ametrallamiento de vehículos: 98, amenazas: 240, propagandas: 343, robos: 421, extorsiones: 9. También se informa que del 18 de enero de 1986 hasta el 8 de junio de 1986 cuatro escuelas fueron destruidas, el día 8 de febrero de 1986 una alcaldía en San Carlos, Morazán, fue destruida, el día 1° de febrero el Juzgado de Paz en Nueva Granada fue destruido, entre el 1° de enero de 1986 y el 31 de agosto de 1986, fueron provocados 20 incendios de fincas, cultivos de café y otras casas. Además se informa de la destrucción de centros de

trabajo 17/. El Representante Especial pudo también leer noticias de la prensa local en que se indicaba que cuatro personas habían resultado heridas a consecuencia de la explosión de una bomba cerca de las bodegas del Banco Hipotecario en San Salvador 18/ y que a causa de atentados terroristas había quedado sin energía eléctrica la zona oriental, al volar cuatro torres sostenedoras de cables de alta tensión 19/. También fue informado el 16 de febrero de 1986 que seis fincas de café del oriente del país habían sido incendiadas por elementos de la guerrilla 20/.

23. En San Salvador la Fuerza Armada suministró al Representante Especial una compilación de aproximadamente 300 artículos de la prensa local sobre violaciones de los derechos humanos en El Salvador durante el período comprendido entre septiembre de 1985 y el 4 de agosto de 1986. Dado el volumen de dicho material, el Representante Especial no puede reflejarlo en mayor detalle.

24. Otros informes sobre la destrucción de la infraestructura económica del país por el FMLN indican que el 26 de febrero de 1986, en el este de El Salvador, los guerrilleros destruyeron una de las cooperativas de algodón más grandes del país, "... matando a cinco soldados e hiriendo a tres ..." 21/.

25. Según otras informaciones, en 1985 el sistema de distribución de energía eléctrica del país sufrió graves daños y el transporte público experimentó más pérdidas que en 1984, "... aunque los daños fueron muy inferiores a los niveles registrados entre 1979 y 1983" y los daños a los principales cultivos de exportación en este período fueron aparentemente inferiores que en los años precedentes. Sin embargo, según la misma fuente, "desde 1979, los daños causados por los insurgentes a la economía se calculan en 1.500 millones de dólares" 22/.

### III. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

#### A. Asesinatos

26. El Representante Especial ha seguido recibiendo información sobre asesinatos o ejecuciones sumarias de personas civiles cometidos por motivos políticos con independencia de los combates. Al igual que en años anteriores, el Representante Especial deja constancia de la dificultad de determinar con precisión el número exacto de estos crímenes.

27. De las cifras suministradas por Tutela Legal 23/, el Representante Especial descuenta las víctimas de ataques indiscriminados del ejército a la población civil, categoría esta última que será tenida en cuenta en otro lugar. Así, pues -según la referida fuente- los asesinatos cometidos con independencia de los combates en 1986 serían los siguientes:

	<u>Escuadrones de la muerte</u>	<u>Ejército</u>	<u>Cuerpo de Seguridad</u>	<u>Defensa civil</u>
Enero	4	2	-	5
Febrero	5	4	-	-
Marzo	1	3	-	-
Abril	9	6	2	-
Mayo	4	3	2	-
Junio	3	6	2	1
Agosto	3	6	-	1
Septiembre	1	1	-	-
Octubre	-	6	1	-
Noviembre	1	2	-	3

28. De acuerdo a Socorro Jurídico 24/, entre el 1° de enero y el 15 de abril de 1986 los Escuadrones de la Muerte y Grupos Paramilitares, así como los miembros de las Fuerzas Armadas habrían cometido 49 ejecuciones arbitrarias. La referida documentación no contiene indicaciones sobre la autoría concreta de las ejecuciones, cuyo número, por lo demás, es más alto que el suministrado para el mismo período de tiempo por Tutela Legal.

29. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador da cifras más bajas para el período enero-mayo 1986 25/, respecto a muertes fuera de combate:

	<u>Muertes de la población civil atribuidas a miembros de la Fuerza Armada</u>	<u>Muertes de la población civil por acciones de personas no identificadas</u>
Enero	3	6
Febrero	1	6
Marzo	1	7
Abril	3	9
Mayo	1	20
Junio	6	9
Julio	0	9

30. De otro lado, y basándose en la información suministrada por la prensa, la Embajada de los Estados Unidos de América en San Salvador 26/ da cifras de muertes de civiles, atribuidas a la violencia política, aún más bajas:



	<u>Enero</u>	<u>Febrero</u>	<u>Marzo</u>	<u>Abril</u>	<u>Mayo</u>
Por la extrema derecha	0	0	0	0	0
Posiblemente por la extrema derecha	0	0	0	2	3
Por asaltantes desconocidos	7	4	2	9	2

31. El Representante Especial hace notar que en las listas transcritas figuran asesinatos que se atribuyen bien a "escuadrones de la muerte", bien a "personas no identificadas", bien a "asaltantes desconocidos". Evidentemente, la responsabilidad por estos asesinatos no recae en el Gobierno de El Salvador, sólo en la medida en que sus autores estén vinculados a agentes gubernamentales o protegidos o tolerados por ellos, existiría responsabilidad de aquel Gobierno, como era claramente el caso en años anteriores a 1985. En lo que concierne a los meses transcurridos del presente año, el Representante Especial no ha podido llegar a conclusiones firmes y definitivas sobre el grado de apoyo o tolerancia que los escuadrones de la muerte hayan podido recibir de agentes gubernamentales, en todo caso el Representante Especial cree que en la actualidad no son jefes y oficiales de alto rango los que apoyan o protegen a las mencionadas organizaciones.

32. Aquellas son, pues, las listas que han llegado al Representante Especial y que éste pone a la disposición de la Asamblea General, señalando que, aun siendo distintas las cifras comunicadas por las distintas fuentes, existe entre ellas un importante punto de coincidencia: el número de asesinatos políticos cometidos por agentes del Estado y eventualmente grupos paramilitares de extrema derecha en 1986 es manifiestamente menor que en 1985, dato éste que confirma la línea descendente que se manifestó de manera particularmente significativa en junio de 1984 cuando el Ingeniero Duarte tomó posesión de su cargo de Presidente Constitucional de la República. El Representante Especial subraya la persistencia de esta línea descendente, al tiempo que expresa su deseo y esperanza de que en el menor tiempo posible se produzca una completa erradicación de las ejecuciones sumarias en El Salvador.

#### B. Capturas y desapariciones

33. El Representante Especial ha continuado recibiendo información sobre personas capturadas por motivos políticos, algunas de las cuales se dan por desaparecidas y, como en su anterior informe, desea dejar claro que también en esta materia hay que proceder con gran circunspección en la valoración de las cifras.

34. El Representante Especial da cuenta en primer lugar de las cifras que da para 1986 Tutela Legal 27/ de capturas imputadas a agentes gubernamentales, advirtiendo no obstante que de ellas descuenta las que, según la referida fuente, se atribuirían a personas desconocidas.

	<u>Enero</u>	<u>Febrero</u>	<u>Marzo</u>	<u>Abril</u>	<u>Mayo</u>	<u>Junio</u>
Capturas	12	15	3	18	45	10
Aparición de capturados en centros oficiales de detención	11	15	3	15	32	12
Capturados no encontrados en el momento de la redacción del informe	1	-	-	3	13	4
	<u>Agosto</u>	<u>Septiembre</u>	<u>Octubre</u>	<u>Noviembre</u>		
Capturas	23	17	14	12		
Aparición de capturados en centros oficiales de detención	24	20	10	8		
Capturados no encontrados en el momento de la redacción del informe	2	6	5	8		

35. Según información dada al Representante Especial por las autoridades competentes, al día 23 de septiembre de 1986 eran 76 los presos políticos internados en la Penitenciaría Femenina de Ylopango -frente a 44 el 1° de septiembre del año anterior- y 972 los presos políticos internados en la Penitenciaría Masculina de Mariona -frente a 462 el 1° de septiembre de 1985. El Representante Especial recuerda (E/CN.4/1986/22, párr. 85) que en 1985 el número de presos políticos había aumentado respecto a 1984.

36. El Representante Especial completa la información dada en el párrafo anterior transmitiendo otros datos suministrados por el Gobierno de El Salvador 28/. Según esos datos, entre el 1° de septiembre de 1985 y el 31 de mayo de 1986 fueron capturados como presuntos terroristas 1.165 personas -frente a 743 entre el 1° de septiembre de 1984 y el 31 de agosto de 1985-, de las cuales fueron puestas en libertad 512 -frente a 309 entre el 1° de septiembre de 1984 y el 31 de agosto de 1985.

37. De la información recogida en los párrafos anteriores resulta, pues, que en 1986 ha aumentado el número de capturas por motivos políticos respecto a las realizadas en períodos anteriores. El Representante Especial *no* niega, por supuesto, el derecho de las autoridades salvadoreñas a proceder legalmente contra quienes atenten por la fuerza de las armas contra el orden constitucional, su preocupación estriba en la aplicación a tales personas de una legislación tan criticada como es la contenida en el Decreto 50, cuyos largos plazos ni siquiera se respetan siempre. El Representante Especial añade, sin embargo, que entre las reformas legales previstas para un futuro inmediato está la del mencionado Decreto, como expondrá con mayor detalle al hablar de los proyectos de la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña.

C. Trato a los presos políticos

38. De acuerdo a Socorro Jurídico 29/ durante los meses de enero a abril de 1986 ingresaron en el Centro Penal de Mujeres de Ylopango 22 personas en calidad de presas políticas, y según el examen que habría hecho la referida organización, se habrían dado casos de torturas con efectos psicológicos, de presiones psicológicas y de torturas con graves efectos físicos, tales como cinco casos de violaciones, 21 de golpes, dos de desnudez forzada y otros casos y, según la misma fuente 30/, entre enero y abril de 1986, ingresaron en el Centro Penal La Esperanza de Mariona, 117 presos políticos masculinos, que en diferentes ocasiones se habrían visto sometidos a torturas con efectos psicológicos y torturas con graves efectos físicos. Con posterioridad a la redacción de su informe a la Asamblea General, el Representante Especial ha continuado recibiendo información de la fuente mencionada sobre numerosas torturas a los presos políticos. (Listas enviadas al Representante Especial el 21 de noviembre y 2 de diciembre de 1986). El Representante Especial recibió también información al respecto de la Comisión de Derechos Humanos (no gubernamental) de El Salvador. Según la referida información habría una amplia y persistente práctica de torturas de presos políticos en los interrogatorios extrajudiciales 31/.

39. En sus visitas a las Penitenciarías de Mariona e Ylopango y en el examen que hizo de testigos, el Representante Especial se interesó particularmente por la cuestión de las presiones psicológicas e incluso otras especies de malos tratos en los interrogatorios extrajudiciales.

40. La Sra. Tula de Canales, de pseudónimo Laura Pinto, miembro del Comité de Madres, detenida en dos ocasiones por las Fuerzas de Seguridad, manifestó en Ylopango al Representante Especial que después de su primera detención, efectuada el 6 de mayo de 1986, estuvo durante cerca de tres días esposada y con los ojos vendados, mientras era interrogada, y que en ese período de tiempo fue objeto de tres violaciones sucesivas, pese a hallarse embarazada de seis meses, así como de una herida en el abdomen con un instrumento cortante. Al Representante Especial consta que la testigo ha hecho la misma declaración en otras ocasiones. Después de su segunda detención, efectuada el 26 de mayo siguiente, y según la declaración prestada ante el Representante Especial, la Sra. de Canales habría sido conducida a la Policía de Hacienda, donde fue golpeada y permaneció 24 horas sin tomar alimento, esposada y con una venda sobre los ojos. La testigo dijo finalmente al Representante Especial que firmó libremente la declaración porque eran sus palabras las que constaban.

41. Otra testigo examinada en la Penitenciaría de Ylopango, detenida el 26 de mayo de 1986, manifestó asimismo al Representante Especial que en el momento de la detención fue vendada en los ojos y esposada y que, conducida a los locales de la Policía de Hacienda, los interrogadores la amenazaron con traer y torturar a una hija suya de año y medio. La testigo manifestó que la declaración extrajudicial contenía cosas que eran ciertas y otras que no, no obstante lo cual ella la firmó. El Representante Especial debe decir que en el Estado Mayor contempló la exhibición de una cinta de video en que la testigo aparecía firmando un documento sin ninguna clase de coacción.

42. Otra presa política interrogada en Ylopango, y detenida el 25 de agosto de 1986, mostró al Representante Especial una herida en la muñeca del brazo derecho causada, según sus declaraciones, por los 13 días que estuvo en la

Policía de Hacienda con las manos esposadas. La misma testigo manifestó que la trataron "bastante mal" porque no aceptaba las acusaciones, que le impedían respirar y le daban "trompadas" en la cabeza y la cara, que estuvo seis días con los ojos vendados y que en cierta ocasión fue interrogada durante toda la noche.

43. El Representante Especial recibió también testimonios en la Penitenciaría Masculina de Mariona. Allí, dos testigos manifestaron haber sufrido fuertes presiones psicológicas en los interrogatorios efectuados en una de las últimas semanas de 1985. Otro testigo manifestó haber sido objeto de ese tipo de presiones cuando, en junio de 1986, fue detenido por fuerzas de la 2a. Brigada, las presiones tenían por objeto la firma por el preso de la declaración extrajudicial y habrían consistido, según el testigo, en fuertes golpes en la canilla del pie, amenazas a la familia, impedirle dormir durante cinco días poniendo un aparato de radio al máximo volumen, tenerlo sin ropa toda una noche en que hacía frío, y hacerle ingerir alimento a la fuerza. El testigo manifestó por fin que, trasladado a los locales de la Guardia Nacional en San Salvador, allí fue obligado a firmar la declaración extrajudicial.

44. Otro testigo, sindicalista de SICAFE, Rafael Martínez, manifestó al Representante Especial haber sido detenido el 31 de mayo de 1986 y llevado al cuartel 6 de Sonsonate donde recibió amenazas sexuales, y otras, y firmó sin poder leer el documento que se le presentó.

45. Otra testigo, también sindicalista, Febe Elisabeth Velásquez, dijo haber sido capturada el 7 de junio de 1986 y que, llevada a la Policía de Hacienda, fue interrogada de pie, sin que se le permitiese comer e ir a los servicios, durante más de 24 horas, hasta el punto de que firmó coaccionada.

46. En fin, también dos hermanas de 16 y 18 años de edad, respectivamente, detenidas por la Policía Nacional, junto a su padre, el 14 de agosto de 1986, manifestaron haber sido objeto de alguna presión, aunque finalmente firmaron lo que ellos habían declarado.

47. Hasta aquí, el Representante Especial ha transcrito testimonios de los que resultaría la existencia de presiones psicológicas en los interrogatorios extrajudiciales de los presos políticos. Otros presos o ex presos de esta categoría, también interrogados por el Representante Especial, no alegaron haber sido objeto de malos tratos o de presión alguna para conseguir la firma de sus declaraciones.

48. El Representante Especial transmitió al Viceministro de Seguridad Pública, Coronel López Nuilla, y a los directores de los Cuerpos de Seguridad su preocupación por los testimonios que acaba de transcribir. La respuesta que recibió el Representante Especial fue que los testimonios eran completamente falsos y que respondían a una consigna de desinformación para desprestigiar a los Cuerpos de Seguridad, y que para salvar el prestigio de estos Cuerpos, en los últimos meses se filmaba en cintas de video el momento en que los presos políticos firmaban sus declaraciones extrajudiciales. El Representante Especial pudo contemplar, en efecto, la exhibición de unas cintas en la que aparecían presos políticos que él conocía y otros que no conocía, firmando, sin ninguna clase de coacción, un papel cuyo contenido no le fue posible determinar.

49. Tras valorar la información recogida en los párrafos precedentes, el Representante Especial reitera la convicción que expresó en su anterior informe sobre la existencia de indicios del ejercicio de duras presiones psicológicas en los interrogatorios extrajudiciales de algunos presos políticos, aunque no cree que se trate de una práctica deliberada y sistemática de las autoridades salvadoreñas.

50. Al Representante Especial le resulta muy difícil precisar el porcentaje de casos en que se producen aquellas presiones, pero señala que fuentes consultadas en El Salvador hablaron de un porcentaje aproximado comprendido entre el 15% y el 20% de los presos políticos. El periodista americano James LeMoine ha escrito en agosto de 1986 32/: "Highly reliable Government and diplomatic officials estimate that 20 per cent of the political detainees suffer some form of significant abuse after arrest".

#### D. Situación de la justicia penal salvadoreña

51. En lo que respecta a la actividad judicial dirigida a la investigación y castigo de las violaciones de los derechos humanos ocurridos en los últimos tiempos en el país, el Representante Especial recibió una vez más un documento del Fiscal General de la República 33/ que trata, entre otros extremos, de la labor de la Fiscalía en algunos casos (los comúnmente llamados casos de relevancia internacional).

52. Así, en el caso seguido por el Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de San Salvador por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Fiscal informó de una serie de actuaciones practicadas a fines de 1985 y en los primeros meses de 1986, actividades -dice el Fiscal- cuyo "resultado no ha sido positivo".

53. El documento del Fiscal se refiere también al sumario seguido por el Juzgado Primero de lo Penal de Sonsonate en el caso "Las Hojas", al que ya se ha referido el Representante Especial en anteriores informes; en cuanto a ese caso se dice que después de una exhaustiva investigación de los hechos se logró que el Juez dictara auto de elevación a plenario contra tres personas, habiéndose sobreseído respecto al resto de los imputados; recurrido este sobreseimiento por la Fiscalía, la Cámara de lo Penal de occidente sobreseyó a favor de todos los procesados; el día 11 de mayo de 1986 se pidió la reapertura del proceso y la práctica de nuevas diligencias.

54. El documento del Fiscal se refiere asimismo al procedimiento penal seguido por los asesinatos del Sr. Viera y dos asesores norteamericanos en el Hotel Sheraton en enero de 1981, señalando que finalmente se dictó en el presente año sentencia condenatoria de 30 años a los procesados; recurrida la sentencia en casación, fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema. En lo que concierne a este último caso, el Representante Especial ha conocido 34/ el disgusto que causó la sentencia en ciertos sectores diplomáticos por el hecho de que los autores intelectuales del asesinato -dos oficiales del ejército y un empresario privado derechista- no hubieran sido condenados.

55. En cuanto al caso de Armenia, relativo a secuestros y ejecuciones sumarias de varios civiles en esa localidad, entre 1980 y 1982, el día 18 de

noviembre de 1985 el juzgado de la instancia competente acordó el sobreseimiento de los encargados; contra esa resolución presentó recurso de apelación la Fiscalía.

56. El Representante Especial se quiere referir a continuación al reciente informe del Lawyers Committee for Human Rights 35/, en el que se examina la situación de 16 importantes casos judiciales de violencia política en los pasados siete años. Según el informe, "es la crónica de un fracaso. En todos los casos, incluidos los cinco casos asignados a la comisión especial que el Presidente Duarte nombró en agosto de 1984, se ha prometido realizar investigaciones oficiales y enjuiciar a los culpables, sin embargo, en esos casos y en decenas de miles de casos menos conocidos, no se ha hecho justicia".

57. De la anterior información se desprende que sólo en uno de los llamados procedimientos de relevancia internacional ha recaído sentencia condenatoria (y aun en este último la sentencia ha sido criticada), lo que demuestra por lo menos una anómala lentitud y un alto índice de inactividad en el funcionamiento de la justicia penal salvadoreña. El Representante Especial hace notar además que no ha recibido información sobre muchos otros casos de graves violaciones de los derechos humanos de que han sido víctimas en los últimos años simples ciudadanos salvadoreños y recuerda que es ésta una materia en la que no deberían singularizarse los casos sea cual sea la presión internacional que se ejerza sólo respecto de algunos de ellos; desde el punto de vista del Estado de Derecho (rule of law), todos los casos deben merecer de la justicia idéntico interés y trato. Es eso lo exigido por el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

58. Al igual que en ocasiones anteriores, el Representante Especial ha recibido información del Gobierno de El Salvador sobre miembros de las Fuerzas Armadas consignados a tribunales comunes entre el 1° de septiembre de 1985 y el 30 de junio de 1986 por delitos cometidos en contra de la población 36/.

59. La documentación a que se refiere el párrafo anterior es detallada y el Representante Especial la ha examinado con sumo cuidado, pero al cabo de este examen ha llegado a la impresión de que en todos o casi todos los casos se trata de delitos comunes y no de violaciones criminales de los derechos humanos cometidos con intencionalidad política; no se informa además del estado de tramitación del procedimiento y, en fin, el Representante Especial no ha tenido conocimiento de que en tales casos, o en otros de los que dio cuenta en informes anteriores, haya recaído sentencia condenatoria o absolutoria.

60. Tras haber valorado cuidadosamente la información recogida en los párrafos anteriores, el Representante Especial continúa pensando que, en su conjunto, la actividad del sistema judicial salvadoreño para investigar y castigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas con intencionalidad política es altamente insatisfactoria. Es verdad que se inician procedimientos penales en todos o en casi todos los supuestos, pero la impresión es que esos procedimientos avanzan a un ritmo extraordinariamente lento y que encuentran barreras casi insuperables para terminar en sentencias condenatorias, propiciando de ese modo la existencia de un nocivo clima de impunidad.

61. Seguidamente, el Representante Especial se propone recoger información sobre la actividad de los tribunales penales salvadoreños competentes para investigar y castigar los actos de colaboración con la oposición armada. Los procedimientos judiciales en cuestión continúan regidos por el Decreto No. 50, promulgado por la Asamblea Legislativa el 29 de febrero de 1984, que contiene la "ley de procedimientos penales aplicables al suspenderse las garantías constitucionales".

62. En un informe anterior (E/CN.4/1985/18, op. cit., párrs. 81 a 85) el Representante Especial informó del contenido del Decreto y de las valoraciones negativas que había merecido. Las críticas a este Decreto han continuado, y el Representante Especial quiere referirse especialmente a la formulada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que estima que el Decreto es contrario a la Constitución Política de El Salvador así como a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos ha contraído la República 37/, y a la contenida en un documento de Socorro Jurídico 38/, que ha movido a dicho organismo a presentar a la Corte Suprema la declaración de inconstitucionalidad del referido Decreto. En todo caso conviene señalar que, según explicaciones dadas al Representante Especial en San Salvador por el Presidente de la Comisión revisora de la legislación salvadoreña, entre los proyectos inmediatos de dicha Comisión figura la modificación o sustitución del mencionado Decreto No. 50.

63. De acuerdo a la información suministrada por el Gobierno de El Salvador 39/ durante 1985 fueron 128 los reos políticos respecto de los cuales se sobreesayó el procedimiento, y en los ocho primeros meses de 1986 -es decir hasta el 31 de agosto- el número ascendió a 110. Esto supone que la reactivación de este tipo de procedimientos haya sido mayor en los meses transcurridos de 1986 que en el pasado año, aunque de los testimonios escuchados por el Representante Especial resulta que se siguen incumpliendo con frecuencia los plazos -ya largos de por sí- establecidos en el Decreto N° 50. De hecho, cuando en septiembre pasado el Representante Especial visitó las penitenciarías salvadoreñas, encontró en ellas en situación de prisión preventiva a algún preso que ya estaba en esa situación hace dos años.

64. Los procedimientos mencionados en el párrafo anterior fueron tramitados por el juez titular del Juzgado Militar de Primera Instancia, número 1, único existente antes del 1° de septiembre de 1986. En su informe del pasado año, el Representante Especial señaló que un solo juez era insuficiente para un número tan alto de procedimientos políticos, y en el presente informe puede decir que por Decreto No. 435 de 19 de agosto de 1986 de la Asamblea Legislativa, y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, se han creado otros dos juzgados de primera instancia militar. Los titulares de estos nuevos juzgados tomaron posesión de su cargo el día 1° de septiembre de 1986. El Representante Especial, que tuvo ocasión en San Salvador de entrevistarse con ellos, espera a partir de ahora una agilización de los trámites en el tipo de procedimientos en cuestión.

65. Como en años anteriores, las autoridades competentes informaron al Representante Especial de las dificultades imperantes para un adecuado funcionamiento de la justicia penal en El Salvador. Las causas de tales dificultades serían las siguientes: a) bajo presupuesto para retribuir

dignamente a jueces y a fiscales, sobre todo en los niveles más bajos, y para dotar de medios suficientes a tribunales, juzgados y dependencias de la Fiscalía; b) carencia de medios idóneos para la investigación de los hechos; c) presión psicológica a que se ven sometidos los jueces, muchos de ellos asesinados o amenazados en períodos anteriores; d) temor de los testigos a declarar en los procedimientos con implicaciones políticas; e) temor de los integrantes de los jurados a actuar en el mismo tipo de procedimientos; f) inadecuación de la legislación penal y procesal penal al actual ambiente de violencia; y g) destrucción de juzgados y archivos en zonas conflictivas. Las autoridades competentes agregaron que aquellas causas no eran completamente nuevas ni privativas de El Salvador pero que se habían agudizado en los últimos tiempos a causa del conflicto civil y la crisis económica.

E. Violaciones de los derechos civiles y políticos  
atribuidos a las fuerzas guerrilleras

66. El Representante Especial ha continuado recibiendo información sobre asesinatos de personas civiles, realizados con intencionalidad política y con independencia de los combates, que se atribuyen a las fuerzas guerrilleras. Obviamente, la circunspección aconsejada para la valoración de la información concerniente a los asesinatos atribuidos a miembros del aparato del Estado, y a organizaciones paramilitares de extrema derecha, debe ser empleada también, respecto a los asesinatos imputados a la guerrilla.

67. Las cifras de Tutela Legal 40/ son las siguientes:

Enero	2
Febrero	1
Marzo	2
Abril	-
Mayo	2
Junio	2
Agosto	2
Septiembre	-
Octubre	2
Noviembre	1



68. Considerablemente más elevadas son las cifras que da la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) en El Salvador 41/:

1985	Septiembre	9
	Octubre	26
	Noviembre	11
	Diciembre	24
1986	Enero	25
	Febrero	24
	Marzo	20
	Abril	21
	Mayo	31
	Junio	22
	Julio	18
		—
Total		231

69. Ligeramente más altas son las cifras comunicadas al Representante Especial por la Fuerza Armada de El Salvador 42/. Según dicha información entre septiembre de 1985 y agosto de 1986, los asesinatos de personas civiles contabilizados por la Fuerza Armada ascienden a 259.

70. El Representante Especial observa que, según Tutela Legal, la cifra de asesinatos de la guerrilla durante los seis primeros meses de 1986 (9) es considerablemente inferior a la de los seis primeros meses de 1985 (31). En cambio, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador, el número de asesinatos de la guerrilla entre septiembre de 1985 y julio de 1986 (231) es superior al del período de septiembre de 1984 a julio de 1985 (172).

71. También se imputan a la guerrilla secuestros de personas realizados con intencionalidad política. Las cifras que da Tutela Legal 43/ son las siguientes:

Enero	3
Febrero	0
Marzo	3
Abril	1
Mayo	0
Junio	0
Agosto	1
Septiembre	1
Octubre	2
Noviembre	2

72. Mucho mayores son las cifras de secuestros de personas civiles atribuidos al FMLN por la Fuerza Armada entre septiembre de 1985 y agosto de 1986 44/. Según esa fuente, en efecto, el FMLN-FDR ha secuestrado en la época mencionada a 357 personas, entre ellas 10 alcaldes, se agrega que no se conoce aún el paradero de algunos alcaldes.

73. El Representante Especial ha recibido variada información sobre los paros decretados por el FMLN. Dichos paros consisten en la prohibición de circular en determinadas zonas y durante cierto período de tiempo, jubilación que afecta a transportes públicos y vehículos privados y que el FMLN intenta hacer efectiva por actos de fuerza que terminan en ametrallamiento e incendio de vehículos e incluso en lesiones y según algunas fuentes, muertes de personas. Los paros causan también daño a la economía.

74. Según información de la Fuerza Armada de El Salvador 45/ durante el período comprendido entre septiembre de 1985 y agosto de 1986 hubo 282 paros. En la prensa local, el Representante Especial ha leído abundantes noticias de estos paros y de las muertes, lesiones y daños a la economía por ellos causados. La Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador ha informado de paros, en el mes de diciembre que acabaron en ametrallamiento de autobuses públicos y muerte de tres personas civiles (Carta del Embajador de El Salvador en Madrid al Representante Especial de 12 de diciembre de 1986).

75. La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador ha suministrado al Representante Especial la siguiente información sobre los paros basada en noticias de la prensa local: prohibiciones de circulación decretadas por los guerrilleros en 1986: 16-22 enero, 31 enero-7 febrero, 10-16 marzo, 12-17 mayo, 20-27 junio, y 24-31 agosto. Atentados en contra de buses: por incendios (3), por ametrallamiento (5), por dinamiteros (1). Otros automóviles incendiados (17). Personas heridas a causa de esos incidentes: más de 16. (Según un artículo se han herido "varias" personas sin especificar el número.)

#### IV. LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS

76. En San Salvador, el Representante Especial y el Ministro del Interior examinaron juntos la situación de los ciudadanos salvadoreños desplazados dentro del país que contaban con los servicios de la Comisión Nacional de Asistencia a los Desplazados (CONADES). Según las informaciones verbales suministradas y los documentos presentados por funcionarios, en agosto de 1986 había un total de 420.000 personas desplazadas en El Salvador 46/. En el informe presentado al Representante Especial por el Presidente José Napoleón Duarte se destacó que se estaban reorientando los servicios prestados a la población desplazada 47/, pues se había roto con "el paternalismo" del pasado, por el cual las personas desplazadas únicamente recibían las raciones de alimentos distribuidas por el Gobierno, habiéndose adoptado la política nueva de proporcionar "alimentos por trabajo", programa cuyo objetivo era reincorporar progresivamente a las personas desplazadas en la sociedad y en la vida productiva.

77. Este año, el Representante Especial ha sido informado una vez más que en algunas ocasiones los salvadoreños desplazados dentro del país que viven en las zonas de combate han sido evacuados a la fuerza por las autoridades. Al respecto, el Representante Especial ha recibido informaciones relativas a la

"Operación Fénix" iniciada por las fuerzas armadas el 9 de enero de 1986 en la región volcánica de Guazapa, a unas 17 millas al norte de San Salvador. Según The Times 48/, el ejército salvadoreño reunió a unas 1.000 personas, que incluían mujeres, niños y ancianos, de la región volcánica de Guazapa y las trasladó a un campamento de refugiados denominado Calle Real, cerca del pueblo de Apopa. De conformidad con otra fuente 49/, la población civil evacuada de la zona de combate sólo incluía a unas 500 personas. A dichas personas se les "trasladó a un lugar seguro ubicado a varias millas de la zona de combate y se les proporcionó alimentos, agua, albergue y ropa. Las personas trasladadas recibieron medicinas y contaron con los servicios de médicos, dentistas, asistentes sociales y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos. La mayoría de la población civil pudo asentarse rápidamente con familiares o amigos o en campamentos de desplazados". Según la misma fuente, los miembros de la prensa internacional lograron entrevistar a las personas evacuadas durante la operación de Guazapa y "no recibieron alegación fidedigna alguna de maltrato" 50/.

78. Americas Watch también proporciona una relación completa de la evacuación, que critica severamente. Según esa organización, "en la evacuación de la población civil durante la Operación Fénix no se cumplieron las normas del derecho internacional relativas a las condiciones satisfactorias que se deben proporcionar a las personas obligadas a abandonar sus hogares". Americas Watch añade que la evacuación no satisfizo los requisitos del artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 51/.

79. En lo que concierne a los desalojos forzados de población civil de la zona de los combates, el Representante Especial entendió, sobre la base del Artículo 17 del Protocolo Adicional II a las Convenciones de Ginebra de 1949, que los desalojos en cuestión estaban autorizados en la medida en que lo requiriese la seguridad de los civiles implicados. Y agregó que, admitida la realidad de la guerra, los sufrimientos que por tales traslados experimente la población civil afectada son menores a los que se derivarían para dicha población, si continuase viviendo en zonas conflictivas a consecuencia de los combates (E/CN.4/1986/22, párr. 142). El Representante Especial se reafirma en dicha convicción y señala que es compartida al menos por una alta jerarquía de la Iglesia salvadoreña.

80. El Representante Especial, entiende, pues, que los desalojos forzados están permitidos por el Derecho Internacional Humanitario en la medida en que lo requiera la seguridad de la población civil, aunque no desconoce los considerables problemas humanos y sociales que se crean con aquellas medidas para las personas implicadas. En el mes de septiembre pasado, efectivamente, el Representante Especial pudo comprobar en persona la gravedad de esos problemas, cuando visitó cerca de la localidad de Zacatecoluca a una colectividad de 84 campesinos, desalojados del cantón San Carlos Lempa, del Departamento de San Vicente, el día 16 de agosto de 1986, y retenidos por el Destacamento Militar de Ingenieros en aquella localidad de Zacatecoluca. Es cierto que los campesinos recibían raciones alimenticias suficientes y que eran objeto de asistencia médica en casos extremos y urgentes, beneficiándose además de la presencia de una asistente social del Ejército, pero no es menos verdad que el lugar donde habitaban -unas antiguas cuadras de caballos- resultaba sumamente insano por el hacinamiento de personas, escasez de agua y

abundancia de mosquitos, los campesinos carecían además de camas e incluso de colchones. El Representante Especial visitó a los campesinos un jueves y, según le explicó el Coronel del Destacamento de Ingenieros, a partir del domingo siguiente se autorizaría la salida de las personas que fueren reclamadas por sus familiares, algunos campesinos que no disponían de familiares mostraban angustia por su suerte. El Representante Especial señala por fin que el deseo unánime de todos los campesinos con quienes conversó era el de poder trabajar la tierra, donde quiera que fuese.

81. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR) 52/ informa de que, al 31 de julio de 1986, los refugiados salvadoreños que recibían asistencia de la OACNUR se dividían en los grupos siguientes: 2.600 en Belice, 3.750 en Costa Rica, 20.900 en Honduras (en los campamentos de Mesa Grande, Colomoncagua y San Antonio), 3.500 en México, 2.300 en Nicaragua y 800 en Panamá.

82. En cuanto a la repatriación de los refugiados de El Salvador, en conversaciones con el Representante Especial celebradas en El Salvador el 22 de septiembre de 1986, el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Ricardo Acevedo Peralta, informó de que se había creado este año la Comisión Tripartita para la Repatriación Voluntaria de los salvadoreños en Honduras.

#### V. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DESAROLLO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

83. Según Tutela Legal 53/ las víctimas de ataques indiscriminados del ejército a la población civil respecto de las cuales no establece presunciones serían las siguientes:

Enero	5
Febrero	0
Marzo	1
Abril	2
Mayo	no hay información
Junio	5
Agosto	no hay información
Septiembre	9
Octubre	1
Noviembre	no hay información

84. De acuerdo a la misma fuente 54/ las víctimas civiles originadas circunstancialmente por minas colocadas por el ejército serían:

Enero	0
Febrero	1
Marzo	0
Abril	2
Mayo	no hay información
Junio	no hay información
Agosto	2
Septiembre	no hay información
Octubre	no hay información
Noviembre	no hay información

85. Y también según Tutela Legal 55/ las víctimas de la violencia política en acciones militares "incluyéndose conjuntamente combatientes y población civil, no pudiendo determinarse la categoría correspondiente por falta de reconocimiento in situ y donde presumiblemente la mayoría son población civil" ascenderían durante 1986 a:

Enero	110
Febrero	81
Marzo	56
Abril	116
Mayo	67
Junio	59
Agosto	32
Septiembre	68
Octubre	25
Noviembre	49

86. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador da para 1986 las siguientes cifras de "muertes de la población civil a consecuencia de enfrentamientos entre la Fuerza Armada y el FMLN-FDR" 56/:

Enero	0
Febrero	3
Marzo	0
Abril	2
Mayo	3
Junio	0
julio	2

87. De otro lado, basándose en informaciones de la prensa, la Embajada de los Estados Unidos de América en El Salvador 57/ da las siguientes cifras de civiles muertos en acción:

Enero	0
Febrero	2
Marzo	2
Abril	2
Mayo	1

88. La necesidad de recurrir a presunciones para determinar las víctimas de la violencia política obedece sin duda a las características del conflicto bélico que se desarrolla en El Salvador. La guerra tiene lugar, efectivamente, entre un ejército regular y unas fuerzas guerrilleras. Y si bien es siempre fácil distinguir entre un civil y un miembro del ejército regular, la distinción entre un no combatiente y un guerrillero puede resultar más problemática sobre todo si el no combatiente pertenece a las llamadas "masas".

89. En su informe a la Asamblea General de 1984 (A/39/636, anexo, párr. 122) el Representante Especial se refirió a las "masas" o colectividades campesinas que sin ser propiamente combatientes conviven con la guerrilla y la ayudan mediante el suministro de medios de subsistencia. Lo que dijo en aquella ocasión y reitera ahora el Representante Especial es que "en la medida en que las llamadas masas no tomen parte en el combate, deben ser consideradas como población civil" y añadió: "de la remisión que hace el artículo 50 del Protocolo Adicional de Ginebra de 1977 al Tercer Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 resulta que deben ser consideradas personas civiles aquellas que siguen a las fuerzas armadas sin formar parte integrante de ellas tales como... proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares. A juicio del Representante Especial, si las "masas" que acompañan a la guerrilla se ajustan a los requisitos señalados en aquellos instrumentos internacionales, no pueden ser consideradas combatientes y su carácter es el de población civil".

90. Cabe, sin embargo, que una persona o personas que comúnmente formen parte de las masas, participen temporalmente o excepcionalmente en acciones incompatibles con su carácter de población civil. Tras haber conversado ampliamente el mes de septiembre pasado en Zacatecoluca con los integrantes de unas "masas", el Representante cree que ello ocurre con alguna frecuencia en El Salvador. Efectivamente, una joven de 18 años dijo al Representante Especial que ella y algunas otras personas, además de "jalar con los muchachos" (guerrilla) les suministraban alimentos y les ayudaban a transportar la munición. El Representante Especial cree que esta última actividad privaba a esas "masas" de su carácter de población civil.

91. Así, pues, si en el terreno de los principios es fácil y segura la distinción entre combatientes y población civil, en el conflicto salvadoreño y por lo que respecta a la guerrilla la frontera real entre combatientes y no combatientes puede ser imprecisa en ocasiones. De esta idea no debe colegirse

que el Representante Especial está afirmando la legitimidad del ataque a las masas. Lo que el Representante Especial pretende decir es que en el momento de contar y clasificar las víctimas causadas por las acciones de guerra del ejército regular de El Salvador, puede ser muy difícil determinar el carácter de combatiente o no combatiente de una persona y, de ahí, la necesidad de recurrir a presunciones.

92. En todo caso, la participación activa de las "masas" en los combates frente al ejército regular, por excepcional y coyuntural que sea, puede motivar de hecho el hostigamiento de éstas y en definitiva la existencia de algunas víctimas civiles causadas ocasionalmente por el ejército, así como daños incidentales a sus propiedades.

93. En relación con esta última clase de víctimas el Representante Especial tuvo ocasión de escuchar algunos testimonios en San Salvador. De esos testimonios deduce el Representante Especial que las víctimas civiles son preferentemente "masas" que se hallan cerca de los guerrilleros en el momento de los combates.

94. Así, un testigo de 55 años, natural de Tenancingo, y a quien le faltaba la pierna a la altura de la rodilla, manifestó que el día 23 de julio de 1986 se encontraba en un determinado cantón, en un lugar próximo a donde estaba operando la guerrilla, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea, disparó un roquetazo que alcanzó al testigo en la pierna, el testigo manifestó que él y otros vecinos del cantón simpatizaban con los guerrilleros, a quienes, en ocasiones, ayudaban con abastos.

95. Otro testigo, de 24 años de edad, natural de San Francisco, Departamento de Cabañas, y residente en un determinado cantón, manifestó haber contemplado el 1° de junio de 1986 un operativo del ejército contra guerrilleros que se encontraban allí, en ese operativo, según el testigo, las fuerzas regulares destruyeron la cosecha de "milpas" y aviones de la Fuerza Aérea lanzaron bombas, que causaron la muerte de dos señoras y heridas a un niño de 8 años y otro de 12; el testigo manifestó que en el momento del operativo la guerrilla se encontraba en la localidad y que los vecinos ayudaban a los guerrilleros vendiéndoles alimentos.

96. Otra testigo, de 20 años de edad, vecina de un cantón del Departamento de San Salvador, manifestó que el día 1° de enero de 1986, el ejército lanzó un operativo contra la guerrilla que se encontraba allí y que entre las fuerzas de tierra, las aéreas, y los paracaidistas destruyeron todas las casas del cantón y quemaron las cosechas.

97. De la información recogida hasta ahora el Representante Especial deduce que en los meses transcurridos de 1986 las fuerzas terrestres y aéreas del Ejército Salvadoreño han producido daños incidentales en propiedades privadas y algunas bajas ocasionales entre la población civil, preferentemente entre las "masas", aunque en un número realmente reducido, e inferior desde luego al del pasado año. El Representante Especial señala también que, a diferencia de lo ocurrido en 1981, 1982, 1983 y 1984, en 1986 el presente año no ha recibido noticia fiable alguna de que el Ejército Salvadoreño haya llevado a cabo alguna matanza masiva.

98. El Representante Especial cree que son dos las causas principales del drástico descenso de las víctimas civiles causadas por el Ejército Salvadoreño. Una primera causa consiste en los desalojos de la población civil de las zonas conflictivas. Al tratar de la situación de los refugiados y desplazados el Representante Especial ha dicho que a su juicio y en principio tales desalojos son legítimos, si bien no dejan de causar ulteriores problemas a las autoridades salvadoreñas.

99. Otra importante causa consiste en la nueva táctica de combatir de la guerrilla, según explicaron al Representante Especial en San Salvador los Generales Blandón -Jefe de Estado Mayor- y Bustillo -Jefe de la Fuerza Aérea. Efectivamente si en los comienzos del conflicto el FMLN combatía por medio de unidades medianas y grandes, la táctica de contrainsurgencia que adoptó el Ejército de El Salvador obligó a los guerrilleros a desplegarse en unidades de muy pocos hombres, que ya no se mueven con las masas, de este modo es posible atacar a los guerrilleros sin que corra peligro la población civil.

100. Así, pues, por las causas mencionadas y en cumplimiento de las instrucciones que dictase el Presidente de la República en agosto de 1984 58/, el ejército regular salvadoreño conduce actualmente la guerra de manera mucho más humanitaria que en el pasado y ha conseguido reducir drásticamente el número de víctimas civiles.

101. En lo que concierne a la manera de hacer la guerra del Ejército Salvadoreño, el Representante Especial ha tenido diversas noticias de desmantelamientos de hospitales de guerra del FMLN por parte del Ejército Salvadoreño. Así, en el curso de la operación "Fénix" en la Zona de Guazapa (enero-febrero) de 1986 las Fuerzas Armadas desmantelaron 18 unidades sanitarias 69/, el 12 y 13 de marzo un hospital y otra unidad sanitaria en Arcatao y Nueva Trinidad (Departamento de Chalatenango) 60/, y en el mes de julio otro hospital en Cinquera (A/39/636, anexo, párr. 125).

102. En la entrevista que sostuvo en El Salvador con el Ministro de Defensa y otras autoridades militares, el Representante Especial se refirió a la cuestión del desmantelamiento de hospitales del FMLN. El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, General Blandón, dijo al respecto que los pretendidos hospitales no tenían por lo pronto señal alguna de identificación y que además no pasaban de ser unos tatus o cuevas donde el FMLN almacena medicinas -generalmente robadas- y esconde a sus heridos y lisiados, manteniéndoles en condiciones inhumanas, y donde se producen muchas muertes por falta de asistencia médica. Añadió el General Blandón que cuando el ejército encuentra heridos o lisiados en esas cuevas los traslada a centros hospitalarios propios para que reciban una asistencia adecuada. De hecho, el Representante Especial fue informado por el Gobierno de El Salvador 61/ "que el día 4 de abril de 1986, siete guerrilleros lisiados que habían sido rescatados por elementos de la Fuerza Armada, del interior de un tatoo al norte de Arcatao, Chalatenango, fueron liberados y entregados a delegados del CICR", se señala que "estas personas fueron encontradas el 13 de marzo de 1986 y trasladadas a un centro hospitalario en la ciudad capital, lugar en donde permanecieron hasta el momento de la entrega", en el télex se da el nombre de los liberados y se dice por fin que "la entrega de los guerrilleros no fue condicionada a ningún canje, sino que constituye una acción que se realiza dentro de los esfuerzos de humanización del conflicto encaminados hacia la consecución de la paz". Americas Watch da cuenta también de estos hechos 62/ que son calificados como "an encouraging development".



103. Preocupación especial causa al Representante Especial la abundancia de personas civiles muertas o gravemente heridas por amputación de miembros -como consecuencia de la guerra de minas.

104. Según información de la Fuerza Armada de El Salvador 63/ en el período comprendido entre el 1° de septiembre de 1985 y el 31 de agosto de 1986 el número de personas civiles muertas a consecuencia del contacto con minas colocadas por el FMLN asciende a 96 y el de personas mutiladas (sin piernas, sin ojos, sin pies) a 1.167. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador hace un estudio 64/ según el cual entre el 1° de septiembre de 1985 y el 31 de julio de 1986 el número de civiles muertos por artefactos explosivos colocados por el FMLN sería de 68 y el de lesionados 208. El Representante Especial señala que el estudio en cuestión es sumamente detallado, en él figuran los datos personales de las víctimas y las circunstancias de tiempo y lugar de la explosión.

105. Sin embargo, en el informe presentado al Representante Especial por la Comisión Política-Diplomática del FMLN-FDR 65/ se dice que "el ejército está multiplicando el uso indiscriminado de minas para dar la impresión que fueron colocadas por el FMLN, provocar víctimas civiles y así tratar de legitimar su uso o por lo menos distanciar del FMLN a los no combatientes. Quiere sobre todo deslegitimar las minas sembradas por el movimiento revolucionario porque quisiera que éste dejara de usarlas ya que para las fuerzas gubernamentales es el arma más temida y que más bajas les está costando". Según el mencionado informe las formas en que el ejército emplea las minas indiscriminadamente serían tres: a) no desactivar las minas sembradas, b) cambiar de sitio las minas puestas por el FMLN, c) minar puntos estratégicos que están poblados.

106. El Representante Especial expuso al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, General Blandón, estas alegaciones del FMLN y la respuesta del militar fue que el ejército únicamente utiliza minas para la protección de los propios puestos de mando y sólo por la noche, que existen pocas unidades especiales para desactivar las minas colocadas por la guerrilla, cuya actividad es desde luego insuficiente (se desactivan sólo 90 minas por día), y que la pretendida recolocación de las minas del FMLN entrañaría grave riesgo para los propios militares.

107. Al Representante Especial no le cabe la menor duda de los efectos mortíferos y mutiladores de las minas colocadas por la guerrilla, ya que en el Hospital Militar de San Salvador pudo ver docenas y docenas de soldados sin pies o sin piernas, o sin brazos, e incluso ciegos, a consecuencia de aquellas minas. La cuestión es la de determinar si muertes o amputaciones semejantes sufridas por no combatientes fueron provocadas por minas guerrilleras o por artefactos colocados por el ejército regular. Personas civiles con miembros amputados interrogados por el Representante Especial manifestaron taxativamente que las minas que les lesionaron eran de origen guerrillero. Tal es también la opinión de la prensa salvadoreña 66/. Y la opinión generalizada que recogió en El Salvador el Representante Especial de fuentes tenidas por independientes es que la inmensa mayoría de las minas que mataban o herían a los no combatientes habían sido colocadas por las fuerzas guerrilleras. Por su parte, el periodista James Lemoyne ha escrito en agosto de 1986 67/: "Aunque tanto el ejército como la guerrilla izquierdista utilizan minas terrestres, según algunos habitantes de las aldeas y diversos funcionarios encargados de examinar la situación de los derechos humanos,

parece que la mayoría de las víctimas civiles se deben a las minas colocadas por la guerrilla". De otro lado, Americas Watch ha dicho: "The FMLN bears greater responsibility than the Armed Forces because it uses mines more extensively and, apparently, more indiscriminately, but both sides share in the blame".68/ Es ésta también la opinión del Representante Especial.

108. El Representante Especial señala finalmente que las fuerzas del FMLN han continuado con la práctica humanitaria de liberar, por medio del CICR, a soldados regulares capturados en combate. Efectivamente, el 25 de febrero de 1986 fueron entregados un cabo y cuatro soldados; el 9 de abril, dos soldados; y el 15 de mayo, un sargento y un soldado. En otra ocasión, un soldado capturado fue entregado directamente a su madre, en presencia de religiosos y vecinos del lugar 69/. El Representante Especial encomia esta práctica del FMLN.

#### VI. LA PREOCUPACION DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS

109. En sus anteriores informes, el Representante Especial dejó constancia de la sincera preocupación de los poderes constitucionales de la República de El Salvador por el respeto a los derechos humanos. En su nueva visita al país en septiembre de 1986 el Representante Especial ha comprobado que las autoridades de El Salvador siguen firmemente comprometidas con dicha política.

110. El Representante Especial fue informado por las autoridades competentes de que continuaban en vigor el P.O.N. ("Procedimiento operativo normal para las detenciones efectuadas por los elementos de la Fuerza Armada") y otras normas complementarias en todas las unidades de la Fuerza Armada y de los Cuerpos de Seguridad.

111. De otro lado, se han seguido impartiendo cursos obligatorios sobre derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad 70/.

112. La Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador ha continuado realizando su labor durante los meses transcurridos de 1986. Así, según documentación entregada al Representante Especial en El Salvador 71/, las tareas llevadas a cabo entre el 1° de septiembre de 1985 y el 31 de agosto de 1986 son las siguientes: realizó y tramitó 3.491 denuncias; registró a 3.907 personas como detenidas en las diferentes unidades militares, de las cuales 2.264 fueron entrevistadas por delegados de la Comisión; brindó asistencia (ropas y artículos de primera necesidad) a 911 detenidos; recibió a 922 presos en el momento de la puesta en libertad; realizó 596 visitas a los Cuerpos de Seguridad, 2.488 a destacamentos militares, cárceles municipales y otros cuerpos militares y 907 a centros penitenciarios; llevó a cabo 355 visitas a juzgados militares y tribunales comunes para informarse acerca de denuncias; y efectuó 524 visitas a diferentes poblaciones para verificar denuncias; y el médico de la Comisión realizó 95 visitas a centros penitenciarios, evacuó 818 consultas de reos políticos y efectuó otras 26 visitas a centros asistenciales. La Comisión llevó a cabo también una labor de promoción de los derechos humanos en todos los sectores de la vida salvadoreña (guarniciones militares, Cuerpos de Seguridad, defensa civil,

comandancias locales, cuerpos de vigilancia de los centros penales, centros educativos, universidades y centros de educación superior, e instituciones públicas y privadas). El Representante Especial señala que otra actividad de la Comisión ha consistido en una campaña de donación de prótesis para las víctimas de explosión de minas de combate, especialmente para niños provenientes de zonas rurales.

113. El Representante Especial tuvo ocasión de examinar en San Salvador algunos de los expedientes motivados por las denuncias mencionadas en el párrafo anterior. Así, en el expediente 1415/1986, se trataba de la denuncia de la violación de una joven de 16 años por unos soldados, la Comisión consiguió poner a los presuntos culpables a disposición del juez.

114. En definitiva, el Representante Especial comprueba una vez más que las actividades de la Comisión resultan encomiables en el conjunto de la situación, toda vez que alivian en muchos casos la desgracia de las personas que sufren las dolorosas consecuencias del conflicto salvadoreño.

115. Al igual que el año anterior, el Gobierno ha consentido que el Comité Internacional de la Cruz Roja siga desempeñando en el país su labor humanitaria. Una vez más, el Representante Especial ensalza la labor del mencionado organismo.

116. Otra importante muestra de la preocupación de los poderes constitucionales de El Salvador por los derechos humanos, es el llamado proyecto de reforma judicial, sobre el que se dio amplia noticia en el informe del año pasado (E/CN.4/1986/22, párrs. 182 a 187), señalándose que tenía cuatro componentes: Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña, Unidad de protección judicial, Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, y Administración judicial y capacitación.

117. En lo que respecta al primer componente del proyecto, el Presidente de la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña, Dr. Criollo, expuso al Representante Especial que dicho organismo cuenta ya con 24 abogados a tiempo completo, los cuales trabajan en tres áreas: penal, civil y orgánico-administrativa. Dijo el Dr. Criollo que en el área penal las labores progresan a buen ritmo y que en el mes de noviembre próximo se espera esté finalizado un proyecto de reforma del Decreto No. 50 y que se trabaja también en la reforma del Código procesal penal, en el área civil las preocupaciones se centran en la modificación del Derecho de Familia, y en el área orgánico-administrativa son varios los temas objeto de atención de la Comisión entre ellos los recursos de amparo, habeas corpus e inconstitucionalidad.

118. El Representante Especial recibió también amplia información en San Salvador sobre la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, cuyos locales tuvo ocasión de visitar. Los casos en estudio a partir de 1986 son: triple homicidio en el Hotel Sheraton, múltiples asesinatos en el Cantón Los Mangos y otros en jurisdicción de Armenia, homicidio del ex Presidente de FINATA, homicidio de la Lic. Ana Delmy Belancourt Ramos, homicidio de Monseñor Romero, y homicidio del sindicalista Aristides Mendez 72/.

119. El Representante Especial reitera su opinión de que el proyecto de reforma judicial es serio y deja constancia del progreso de sus componentes,

aunque señala de nuevo que sus efectos se dejarán sentir en la realidad salvadoreña a medio y a largo plazo, pues a fin de cuentas es preciso cambiar también mentalidades y hábitos cívicos, y estos últimos cambios no pueden tener lugar de la noche a la mañana.

120. Otra muestra de la preocupación del Gobierno de El Salvador por la mejora de la situación de los derechos humanos es el trato que dispensa a los guerrilleros que desean reincorporarse a la legalidad. Efectivamente, según información de la Fuerza Armada de El Salvador 73/ el Gobierno dispone de un plan especial para aquellos individuos alzados en armas que deseen personalmente incorporarse a la vida nacional; las personas que abandonan la subversión y entregan su arma reciben una ayuda económica de 1.000 colones (200 dólares); después de una conversación son amnistiados e incorporados a la vida familiar en sus comunidades respectivas. Se informa además que desde septiembre de 1985 a agosto de 1986 se han acogido a este plan 767 personas.

121. El Representante Especial entiende en definitiva que los poderes constitucionales de la República de El Salvador persisten en sus esfuerzos de mejorar la suerte de los derechos humanos, dentro del proceso de normalización política de la República; esfuerzos, es preciso decirlo, que van teniendo un reflejo cada vez mayor en la realidad, particularmente en el terreno crucial del respeto a la vida de las personas civiles, tanto con independencia de los combates como con ocasión o a consecuencia de ellos. Obviamente, el Representante Especial espera que los mencionados esfuerzos consigan prontamente una completa erradicación en el país de toda clase de violaciones a los derechos del hombre y libertades fundamentales.

## VII. CONCLUSIONES

122. En lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, el Representante Especial advierte que en 1986 se ha producido un nuevo y preocupante endurecimiento de las condiciones de vida de los ciudadanos salvadoreños que se debe fundamentalmente a la persistencia del conflicto y a la crisis económica mundial. El Representante Especial deja constancia asimismo de que los desalojos forzados de población civil, aún compatibles en principio con el derecho internacional humanitario, causan posteriormente problemas humanos y sociales de difícil solución. En fin, el Representante Especial llama una vez más la atención sobre el hecho de que los atentados sistemáticos que el FMLN realiza contra la infraestructura económica de la República comprometen gravemente el disfrute presente y futuro de importantes derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos salvadoreños.

123. En lo que respecta a asesinatos políticamente motivados cometidos con independencia de los combates por miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad y Defensa Civil, el Representante Especial cree que en 1986 han seguido teniendo lugar, en número difícil de determinar con exactitud, si bien tiene la seguridad de que ese número es manifiestamente menor al correspondiente a 1985, con lo cual se confirma la tendencia al descenso de las cifras que se manifestara significativamente cuando, en junio de 1984, el Sr. Duarte tomó posesión del cargo de Presidente Constitucional de la República. Algunos de esos asesinatos han sido imputados a escuadrones de la muerte, presuntamente conectados con agentes de las Fuerzas Armadas o Cuerpos

de Seguridad o tolerados por ellos, autoría que al Representante Especial le ha sido muy difícil comprobar, aunque su impresión es que, en la hipótesis de que existieran y actuaran, de ningún modo los escuadrones de la muerte están hoy vinculados a militares de alta graduación.

124. La guerrilla, por su parte, ha continuado con la práctica de ejecuciones sumarias y secuestros de civiles, aunque el Representante Especial no ha tenido noticias de matanzas masivas, como las cometidas el año pasado.

125. El Representante Especial comprueba, de otra parte, que ha aumentado el número de presos políticos, y que, en algunos casos tales presos han sido objeto de rigurosas presiones psicológicas, lo que de todos modos no constituye una práctica sistemática de las autoridades salvadoreñas. El Representante Especial señala también que a los mencionados presos se les aplica una legislación tan ampliamente criticada como la contenida en el Decreto 50, aunque advierte que es intención de los poderes constitucionales salvadoreños modificar la referida legislación.

126. En cuanto a la justicia penal de la República de El Salvador, el Representante Especial comprueba que la actividad dirigida a la investigación y castigo de los culpables de las graves y numerosas violaciones cometidas en años anteriores sigue siendo sumamente insatisfactoria, y que las actuaciones dirigidas a la investigación y castigo de los sospechosos de colaboración con la oposición armada, aunque han experimentado una leve reactivación en los últimos tiempos, continúan regidas por una legislación ampliamente criticada -el Decreto 50-, cuyos largos plazos ni siquiera siempre se respetan. El Representante Especial toma nota de todos modos de las dificultades existentes para un normal funcionamiento de la justicia penal, así como de los importantes proyectos de reforma judicial, proyectos serios y encomiables, que están ya en marcha pero cuyos efectos no han tenido aún reflejo significativo en la realidad salvadoreña.

127. En lo que respecta al desarrollo de los conflictos armados, el Representante Especial señala que, al igual que en 1985, pero a diferencia de años anteriores, no ha recibido noticia alguna de matanzas masivas por parte del Ejército regular de El Salvador. Sin embargo, el Representante Especial tiene la convicción de que en 1986 el Ejército regular ha causado daños incidentales en propiedades privadas así como víctimas ocasionales en la población civil, preferentemente entre las llamadas "masas" víctimas cuyo número es reducido, y desde luego manifiestamente inferior al de pasados años. El Representante Especial da cuenta asimismo de la amplia y preocupante cifra de personas no combatientes muertas o gravemente lesionadas por la explosión de minas de contacto y deja constancia de que según opinión generalizada, que él mismo comparte, la mayoría de tales minas ha sido colocada por fuerzas guerrilleras del FMLN.

128. Hay que señalar que estas últimas fuerzas han procedido a liberar por medio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) soldados capturados en combate.

129. El Representante Especial advierte por fin que la cuestión del respeto a los derechos humanos sigue constituyendo un componente importante de la actual política del Gobierno constitucional del Presidente Duarte, política que,

dentro del proceso de normalización democrática, está consiguiendo logros cada vez más significativos y dignos de encomio en el terreno crucial del respeto a la vida de las personas, tanto fuera de los combates como con ocasión o a consecuencia de ellos.

## VII. RECOMENDACIONES

130. Recordando una vez más la preocupación expresada por el Gobierno de El Salvador y los otros sectores interesados hacia el respeto de los derechos humanos, y teniendo en cuenta sobre todo que el derecho a la vida tiene carácter primordial y que sus violaciones son irreversibles, el Representante Especial recomienda ante todo, y nuevamente con el mayor énfasis, la adopción inmediata por las partes interesadas de las medidas necesarias para poner fin de modo absoluto a los atentados contra la vida, integridad física y libertad de las personas no combatientes, tanto se produzcan los atentados con independencia de los combates como con ocasión o a consecuencia de los mismos, y de acuerdo todo ello a las Convenciones de Ginebra de 1949, los Protocolos Adicionales de 1977 y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en vigor para la República de El Salvador.

131. Comprendiendo, desde luego, las dificultades del diálogo y haciéndose eco de la opinión de la comunidad internacional y de lo que cree es sentimiento y aspiración de la inmensa mayoría de los ciudadanos salvadoreños, el Representante Especial recomienda una vez más al Gobierno de El Salvador y al FMLN-FDR la rápida reanudación de las conversaciones -unas conversaciones abiertas y generosas, no simplemente tácticas- con miras, al menos, a conseguir la humanización del conflicto, de modo que se pueda llegar a una solución negociada que salve la vida de muchos ciudadanos de la República de El Salvador, no combatientes y combatientes.

132. El Representante Especial recomienda particularmente a las autoridades constitucionales de la República de El Salvador:

- a) La pronta derogación de la legislación incompatible con los estándares internacionales que en materia de derechos humanos obligan convencionalmente a la República, y la adopción de normas compatibles con dichos estándares, particularmente en la persecución de los delitos políticos,
- b) La continuación e intensificación del control de los interrogatorios extrajudiciales de los presos políticos a fin de que se ajusten a los estándares mencionados en el inciso a) anterior,
- c) La continuación y profundización de la reforma agraria y la reforma judicial, con sujeción e inspiración en los estándares del inciso a) anterior.

133. A las fuerzas del FMLN, el Representante Especial recomienda especialmente:

- a) La abstención de colocar minas que puedan acabar con la vida e integridad física de la población no combatiente,
- b) La abstención de atacar a la infraestructura de la economía salvadoreña.

134. Finalmente, el Representante Especial se atreve a recomendar a todos los Estados de la comunidad internacional, particularmente a los más ricos y desarrollados, que en la medida de sus posibilidades presten la ayuda necesaria para el alivio y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos salvadoreños refugiados y desplazados a consecuencia del conflicto.

Notas

- 1/ El País, 12 a 16 de marzo de 1986.
- 2/ El País, 3 y 5 de junio de 1986; Le Monde, 4 y 5 de junio de 1986, Herald Tribune, 3 y 5 de junio de 1986.
- 3/ El País, 23 de junio de 1986.
- 4/ ABC, Madrid, 21 de agosto de 1986; El País, 21 de agosto de 1986.
- 5/ El País, 20 de septiembre de 1986.
- 6/ Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1985, El Salvador, LC/L.390/Add.1), de Agosto de 1985, pág. 1.
- 7/ Gobierno de El Salvador, "La situación de los derechos humanos ...".
- 8/ Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bureau of Public Affairs, "The situation in El Salvador", pág. 7.
- 9/ Gobierno de El Salvador, "La situación de los derechos humanos".
- 10/ Ibid., págs. 49 y 50.
- 11/ Departamento de Estado de los Estados Unidos, "The Situation in El Salvador", págs. 7 y 8.
- 12/ Christian Science Monitor, 5 a 11 de abril de 1986; International Herald Tribune, 4 de marzo, 3 y 4 de mayo de 1986.
- 13/ International Herald Tribune, 3 y 4 de mayo de 1986.
- 14/ Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Informe de Actividades Desarrolladas, período de septiembre de 1985 a agosto de 1986.
- 15/ Gobierno de El Salvador, "La situación de los derechos humanos", pág. 63.
- 16/ Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública, "Lista Cronológica de las Violaciones de los Derechos Humanos por zonas de El Salvador por el FMLN-FDR durante el período septiembre de 1985 a agosto de 1986", tomo I, San Salvador, 31 de agosto de 1986.
- 17/ Ibid., tomo II.
- 18/ Diario del Mundo, 5 de marzo de 1986.
- 19/ La Prensa Gráfica, 6 de febrero de 1986.
- 20/ El Diario de Hoy, 16 de febrero de 1986.



Notas (continuación)

21/ International Herald Tribune, 26 de febrero de 1986,  
The Times, 26 de febrero de 1986.

22/ Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bureau of Public  
Affairs, "The Situation in El Salvador", pág. 2.

23/ Tutela Legal, informes Nos. 45 a 55. -----

24/ Socorro Jurídico Cristiano, El Salvador, Ejecuciones arbitrarias  
cometidas por: a) Escuadrones de la Muerte y Grupos Paramilitares,  
b) Miembros de las Fuerzas Armadas (Ejército armado y Cuerpos de Seguridad y  
Defensa Civil), período de enero a abril de 1986.

25/ Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, informe de actividades  
desarrolladas, período de septiembre de 1985 a agosto de 1986.

26/ Civilian deaths from 1 January through 31 May 1986 attributable to  
political violence according to the press as reported by the Embassy of the  
United States of America, by category.

27/ Tutela Legal, informes Nos. 45 a 55.

28/ Gobierno de El Salvador, listado de detenidos por terrorismo,  
período 10 de septiembre de 1985 a 31 de mayo de 1986.

29/ Socorro Jurídico, Boletín Especial, 15 de junio de 1986.

30/ Socorro Jurídico, Boletín Especial, 1<sup>o</sup> de mayo de 1986.

31/ El Salvador. Los Efectos de la Tortura. Sicólogos de El Salvador,  
"La Tortura en El Salvador", Septiembre de 1986.

32/ The New York Times, 26 de agosto de 1986.

33/ Informe sobre la intervención de la Fiscalía General de la República  
en el control y respeto de los derechos humanos, San Salvador, 22 de  
septiembre de 1986.

34/ The New York Times, 15 de febrero de 1986.

35/ Lawyers Committee for Human Rights, "El Salvador: Human Rights  
Dismissed. A report on 16 unresolved cases", julio de 1986.

36/ Estadística de miembros de la Fuerza Armada que han sido capturados  
por la Policía Nacional y consignados a los tribunales comunes por diversos  
delitos en contra de la población. Período 1<sup>o</sup> de septiembre de 1985 al 20 de  
junio de 1986.

37/ Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Instituto de Derechos  
Humanos, Fascículo I: Los derechos humanos y el Decreto No. 50, San Salvador,  
enero de 1986.

38/ Socorro Jurídico, Petición de Declaración de Inconstitucionalidad  
del Decreto No. 50, San Salvador, 7 de abril de 1985.

Notas (continuación)

39/ Juzgado primero de primera instancia militar. Nómina de reos sobreseñados por diferentes delitos de: actos de terrorismo, cooperación en propaganda subversiva, tenencia, portación de armas de guerra etc.

40/ Tutela Legal, informes Nos. 45 a 55.

41/ Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, informe de actividades desarrolladas, período de septiembre de 1985 a agosto de 1986.

42/ Fuerza Armada de El Salvador, Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública, Viceministro de Seguridad Pública, "Informe de la Fuerza Armada de El Salvador sobre los derechos humanos durante el período de septiembre de 1985 a agosto de 1986".

43/ Tutela Legal, informes Nos. 45 a 55.

44/ Fuerza Armada de El Salvador, "Informe de la Fuerza Armada de El Salvador sobre los derechos humanos durante el período de septiembre de 1985 a agosto de 1986", pág. 4.

45/ Ibid.

46/ Ibid.

47/ Gobierno de El Salvador, "La situación de los derechos humanos ...", pág. 6, y Ministerio del Interior, información entregada al Representante Especial, septiembre de 1986.

48/ The London Times, 3 de abril de 1986.

49/ Departamento de Estado de los Estados Unidos, "The situation in El Salvador".

50/ Ibid.

51/ Americas Watch, "Settling into Routine. Human Rights Abuses in Duarte's. Second Year. Eighth supplement to the Report on Human Rights in El Salvador, New York, May 1986".

52/ United Nations High Commissioner for Refugees, "Fact Sheet, Central America and Mexico", Geneva, August 1986.

53/ Tutela Legal, informes Nos. 45 a 55.

54/ Ibid.

55/ Ibid.

56/ Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, informe de actividades desarrolladas, período septiembre de 1985 a agosto 1986.

57/ Civilian deaths from 1 January through 31 May 1986 attributable to political violence according to the press as reported by the Embassy of the United States of America, by category.

Notas (conclusión)

58/ La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, de San Salvador, 13 de marzo de 1986.

59/ The New York Times, 20 de marzo de 1986.

60/ El Diario de Hoy, 20 de julio de 1986.

61/ Télex de la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador anexo a la nota verbal de fecha 22 de abril de 1986 de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y los organismos internacionales, Ginebra, Suiza.

62/ Americas Watch "Settling into Routine ...", pág 35.

63/ Fuerza Armada de El Salvador, "Informe de la Fuerza Armada sobre los derechos humanos durante el periodo de septiembre de 1985 a agosto de 1986, pág. 20.

64/ Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, "Población civil víctimas de artefactos colocados por elementos del FMLN-FDR durante el período comprendido de 1985 a julio de 1986".

65/ Comisión Política-Diplomática del FMLN-FDR, "Los derechos humanos y la paz. Las principales violaciones a los derechos humanos y perspectivas de solución política en El Salvador", 1° de julio de 1986.

66/ Fuerza Armada de El Salvador, información de la prensa nacional sobre las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, período septiembre de 1985 a agosto de 1986, anexo IV.

67/ The New York Times, 1° de agosto de 1986.

68/ Americas Wacht "Land Mines in El Salvador and Nicaragua -The Civilian Victims December 1986, pag. 12.

69/ Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. "Algunos prisioneros de guerra liberados por el FMLN", Nueva York, 8 de octubre de 1986.

70/ Fuerza Armada de El Salvador, "Informe de la Fuerza Armada sobre los derechos humanos durante el período de septiembre de 1985 a agosto de 1986".

71/ Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, informe de actividades desarrolladas, período septiembre de 1985 a agosto de 1986.

72/ Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, "La situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en El Salvador, durante el período septiembre de 1985 a julio de 1986", informe provisional. Entregado en mano al Representante Especial por el Presidente de la República.

73/ Fuerza Armada de El Salvador, "Informe de la Fuerza Armada sobre los derechos humanos durante el período de septiembre de 1985 a agosto de 1986", pág. 33.